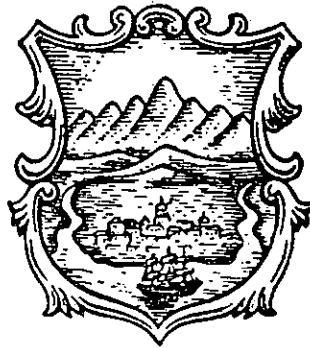


Definitiva



CONCEJO MUNICIPAL

SANTIAGO DE CALI

ACUERDO No. 003 DE 11 DIC. 1970 19

"POR EL CUAL SE DEROGAN, MODIFICAN Y ADICIONAN ALGUNOS ARTICULOS DEL ACUERDO No.50 DE DICIEMBRE 16. DE 1.961 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"



CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

ACUERDO No.

003

DE 196

(11 DIC. 1970)

Vigente:

Ver Accto 003/73

Trib. contencioso

Admin.

*reformado por
acuerdo 038/71*

"POR EL CUAL SE DEROGAN, MODIFICAN Y ADICIONAN ALGUNOS ARTICULOS DEL ACUERDO No.50 DE DICIEMBRE 1o. DE 1.961 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

El Concejo de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones legales,

ACUERDA:

Artículo 1o. - El Artículo 24 del Acuerdo No.50 de 1.961, quedará así:

La Junta Directiva del Establecimiento Público Empresas Municipales de Cali -EMCALI-, se integrará así:

- a) Por el Alcalde Municipal de Cali, o un delegado suyo;
- b) Por el Presidente del Concejo Municipal, o un delegado suyo; y
- c) Por tres miembros elegidos por el Concejo Municipal, con sus respectivos suplentes, pudiendo éstos últimos ser personas ajenas a la constitución de la Corporación.

Artículo 2o. - El Artículo 31 del Acuerdo No.50 de 1.961, quedará así:

El periodo de ejercicio de la Junta Directiva será de dos (2) años, los cuales principiarán a contarse a partir del 1o. de enero de 1.971. Los miembros de la Junta Directiva pueden ser reelegidos indefinidamente, y al vencerse su período, continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta que se haga nueva elección.

Artículo 3o. - El Gerente General será elegido por la Junta Directiva, para periodos anuales y podrá ser reelegido indefinidamente. Esta elección se hará por los votos favorables de la mitad más uno de los representantes de la Junta Directiva a quienes se les haya otorgado las facultades decisorias con voz y voto. El periodo del Gerente se iniciará el 1o. de enero de 1.971.

Artículo 4o. - Tendrán voz en las deliberaciones de la Junta Directiva: el Gerente del Banco de la República en Cali, el Jefe de Valorización, el Director de Planeación y el representante de los fideicomisarios o financiadores de Emcali.

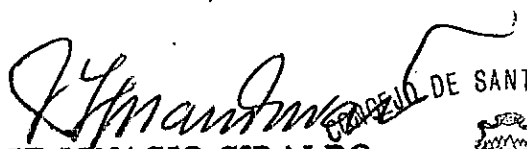

Artículo 5o. - Se aclara que como el ESTABLECIMIENTO PUBLICO EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI ha venido financiando la construcción y ensanche de los servicios públicos de la ciudad con préstamos de di-

versas entidades internacionales (BID, BIRF y AID) sobre la base contractual de garantizarse la existencia autónoma del establecimiento, la Corporación reitera, ratifica y garantiza este principio fundamental, y más aún, cuando las modificaciones y derogaciones propuestas en este Acuerdo no reforman substancialmente el carácter y naturaleza de EMCALI, ni lesiona su patrimonio, facultades, capacidades o solvencia del establecimiento como deudor de los organismos internacionales mencionados anteriormente.



Artículo 6o. - En los términos anteriores quedan derogados los artículos 24, 25, 40 y 61 del Acuerdo No.50 de 1.961, y todas las disposiciones que le sean contrarias, ya por el mismo Acuerdo No.50 de 1.961, o por otros actos oficiales, y el presente rige desde su sanción.

Dado en Cali, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de mil novecientos setenta (1.970).

EL PRESIDENTE,


JOSE IGNACIO GIRALDO
PRESIDENCIA


EL SECRETARIO,


CAMILO VILLEGAS JARAMILLO
SECRETARIA


Certifico: Que el presente Acuerdo fue discutido en los tres debates reglamentarios y aprobado en cada uno de ellos en sesiones verificadas en días diferentes, así: primer debate, en la sesión ordinaria del 9 de noviembre; segundo debate, en las sesiones ordinarias del 23 y 24 de noviembre y tercer debate, en la sesión ordinaria del 25 de noviembre de 1.970.


CAMILO VILLEGAS JARAMILLO
SECRETARIO


nms.

Cali, Diciembre 3 de 1.970

Doctor

JOSE IGNACIO GIRALDO

Presidente del H. Concejo Municipal de Cali

Ciudad

Señor Presidente Honorables Concejales:

Por Oficio No. 0177 del 27 de noviembre de 1.970 la Secretaría del H. Concejo Municipal ha remitido para la sanción ejecutiva el proyecto de Acuerdo por el cual se derogan, modifican y adicionan algunos artículos del Acuerdo No. 50 de diciembre 10. de 1.961 y se dictan otras disposiciones.

Para ejercer las atribuciones que confiere al Alcalde Municipal el artículo 175 de la Ley 4a. de 1.913 y los artículos 9o. y 10 de la Ley 72 de 1.926 el Ejecutivo considera del caso hacer las siguientes consideraciones:

El legislador municipal de 1.961 por medio del Acuerdo #50 del 10. de diciembre de dicho año decidió crear un organismo autónomo con carácter de establecimiento público descentralizado el cual "será una persona jurídica de derecho público que tendrá el patrimonio propio que se le asigna en este Acuerdo y las facultades para ejercer funciones de servicio público propias de la Administración Municipal..." (Artículo 1o. del Acuerdo #50 de 1.961) y que "como persona jurídica será sujeto de los derechos inherentes a esa calidad de acuerdo con las normas legales y de los que correspondería al Municipio de Cali para atender a los servicios públicos de competencia del establecimiento" Artículo 2o. ibidem.

Quizo pues el Legislador Municipal de 1.961 que para la prestación de unos servicios públicos a cargo del Municipio de Cali existiera no sólo un establecimiento descentralizado de derecho público si nó además una persona jurídica independiente del mismo Municipio con sus propias facultades y que como tal sería sujeto de derechos inherentes a la calidad de persona jurídica. Es evidente y conocido de todos que el propósito del legislador de 1.961 fué dotar a dicha persona jurídica de la independencia y autonomía suficiente frente a la Administración Central Municipal para en desarrollo de una sana doctrina de derecho público administrativo vigente por ese entonces y todavía no reválida en Colombia dotar a esa entidad de las suficientes facultades para desarrollar los programas de servicio público que a ella se le encomendaba.

Pero no se contentó el legislador de 1.961 con ser o crear la persona jurídica si nó que la dotó de ciertos derechos y facultades propios de ella y quizo resguardar de manera palmaria y principal la autonomía e independencia propia de dicha persona jurídica como tal. Con este propósito evidentemente dispuso una serie de normas que garantizaban, para esa persona jurídica que había creado independiente y distinta de Municipio y apartada por así decirlo de la entidad Municipal propiamente dicha, la autonomía e independencia característica de la personería jurídica de modo que esa persona no sólo en teoría tuviese unos derechos propios de su calidad de persona si no que además en la práctica tuviese los medios de defender esos derechos y se establecieran los requisitos y condiciones indispensables para que tal independencia y tal libertad pudiera subsistir. En este orden de ideas el legislador municipal de 1.961 dispuso que los estatutos de la persona jurídica que por el Acuerdo 50

de 1.961 estaba creando, solamente podrían ser modificados con sujeción a unas prescripciones determinadas en el mismo Acuerdo y a iniciativa de la propia persona jurídica a través de su Junta Directiva como se vé claramente en el artículo 61 del Acuerdo mencionado.

En desarrollo de este propósito del Legislador Municipal de dotar a las Empresas Municipales de Cali de personería jurídica autónoma e independiente y facultado por el mismo Acuerdo el señor Gerente del Establecimiento Empresas Municipales de Cali solicitó y obtuvo de la Gobernación del Departamento el reconocimiento de la personería jurídica de la entidad el que fué otorgado por medio de la Resolución # 1101 del 15 de abril de 1.962 originaria de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. - Así pues por el Acuerdo 50 de 1.961 nació a la vida jurídica colombiana como persona autónoma e independiente la entidad denominada Establecimiento Público Empresas Municipales de Cali y su personería jurídica fué reconocida de conformidad con la Ley por Resolución del Gobernador del Departamento en uso de la facultad conferida por el Decreto Nacional # 2703 de 1959. Como quedó dicho ese acto creativo del legislador municipal y ese reconocimiento de la autoridad competente de tal personería dotó al Establecimiento Público Empresas Municipales de Cali de las facultades, derechos y deberes propios de las personas jurídicas o en otros términos dotó a ese Establecimiento de la capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones capacidad que es lo que caracteriza en derecho a la personalidad bien sea ésta natural o jurídica.

Por otra parte como dije atrás el Legislador Municipal de 1.961 quiso dotar en el mismo acto creativo a esa persona jurídica que estaba generando de una notable autonomía que quiso resguardar al máximo estableciendo en el artículo 61 del Acuerdo # 50 de 1.961 que "las disposiciones sobre la constitución y los estatutos de Emcali contenidos en el presente Acuerdo sólo podrán ser modificados mediante Resolución aprobada por la Junta Directiva de Emcali en dos sesiones con un intervalo mínimo de 8 días la una de la otra debiendo para su validez obtener esta Resolución la aprobación del Concejo Municipal por medio de un Acuerdo aprobado por las dos terceras partes de sus miembros". En esta forma el Legislador Municipal de 1.961 dotó al Establecimiento Público Empresas Municipales de Cali de un derecho adquirido con arreglo a las leyes y con justo título cual era el de que la iniciativa para reformar su constitución estatutaria quedaba asignado a su propia Junta Directiva, derecho tan importante si nó más como todos aquellos que por el mismo Acuerdo se le concedieron para administrar su propio patrimonio para reglamentar su vida interna para desarrollar sus relaciones con terceros y en fin para ejecutar toda clase de actos y contratos propios de su objeto jurídico.

Por su parte el artículo 30 de la Constitución Nacional "garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título con arreglo a las leyes civiles por personas naturales o jurídicas los cuales no podrán ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores"

Como el Acuerdo que ha venido a la sanción del Ejecutivo modifica los estatutos constitutivos del Establecimiento Público Empresas Municipales de Cali, desconociendo el derecho de la Junta Directiva de dicho Establecimiento a tener la iniciativa para la modificación de tales estatutos por cuanto que el Acuerdo en mención tuvo su origen en un grupo de Concejales y no en la propia Junta Directiva, es claro que vulnera un derecho del Establecimiento Público Empresas Municipales de Cali garantizado por el artículo 30 de la Cons-

titución Nacional y en consecuencia es obligatorio concluir que el Acuerdo materia de este estudio es inconstitucional por estar directamente en contradicción con los derechos garantizados por el artículo 30 de la Constitución Nacional. -

Pero es más, señor Presidente y Honorables Concejales. El artículo 197 de la Constitución Nacional dispone que "son atribuciones de los Concejos que ejercerán conforme a la ley las siguientes:... 4o.- Crear, a iniciativa del Alcalde los Establecimientos Públicos, Sociedades economía mixta y Empresas Industriales y comerciales conforme a las normas que determina la Ley". Viene así a resultar que en cuanto a la creación de los Establecimientos Públicos la prestación de los servicios municipales la iniciativa corresponde al Alcalde Municipal. No habiendo tenido su origen en la iniciativa del Alcalde el Acuerdo que ha venido a la sanción del Ejecutivo cabe colegir que es también inconstitucional por cuanto que viola el artículo 197 numeral 4o. de la Constitución Nacional. -

"Pero se podría arguir en contra y para el caso en estudio que la adición del artículo 197 se refiere a la creación de los Establecimientos Públicos y nó expresamente a la modificación o reorganización de los existentes. El argumento carece de consistencia por cuanto el término creación empleado por el constituyente debe tenerse como genérico o sea comprensivo de todos los demás actos que en una o en otra forma incidan sobre la estructura jurídico administrativa del Establecimiento Público. DE LO CONTRARIO, SO PRETEXTO DE MODIFICAR, SE PUEDEN DESTRUIR LOS FINES INICIALES, LAS BASES FUNDAMENTALES DE ORGANIZACION, MUDANDO LA NATURALEZA DEL ESTABLECIMIENTO" (concepto del actual Magistrado de la Honorable Corte Suprema de Justicia doctor Eutorgio Sarria fechado el 29 de enero de 1.969 sobre la capacidad del Concejo Municipal de Cali para reformar los Estatutos de Empresas Municipales de Cali). Y es que sería absurdo pensar que el constituyente de 1.968 quiso dotar al Alcalde de la iniciativa para crear Establecimientos Públicos para que una vez creados tales Establecimientos pudiesen ser reformados, derogados, modificados por la simple iniciativa o decisión de los Concejos. Este planteamiento haría nugatoria por completo la iniciativa del Alcalde y por ende la concepción y la intención del constituyente. -

Además, el Acuerdo objeto de estas consideraciones dispone que la Junta Directiva del Establecimiento Público Empresas Municipales de Cali se integrará así: por el Alcalde Municipal de Cali o un delegado suyo; por el Presidente del Concejo Municipal o un delegado suyo y por tres miembros elegidos por el Concejo Municipal con sus respectivos suplentes pudiendo estos últimos ser personas ajenas a la constitución de la Corporación. En esta forma pretende el Honorable Concejo disponer que la Junta Directiva de las Empresas Municipales estará integrada por el Alcalde de la ciudad y cuatro Concejales y pretende por medio de Acuerdo Municipal elegir por derechas a uno de tales Concejales el señor Presidente del Concejo. A nuestro juicio esta norma es plenamente violatoria del artículo 172 de la Constitución Nacional el que dispone que "a fin de asegurar la representación proporcional de los partidos, cuando se vote por dos o más individuos en elección popular o en una Corporación Pública se empleará el sistema del cuociente electoral". Es obvio pues que a través del expediente de designar como miembro de una Junta de elección por parte de la Corporación Edilicia a un dignatario de la misma Corporación se está violando flagrantemente el derecho que tienen los partidos a la representación proporcional que el artículo 172 de la Constitución Nacional quiere cautelar celosamente.

Vale la pena además enunciar así sea tangencialmente un aspecto no menos importante. En uso de las facultades que le confieren los artículos 38 y 18 de sus propios Estatutos las Empresas Municipales de Cali celebraron contratos con terceros con cláusulas que garantizan su permanencia en el tiempo y la es-

tabilidad estatutaria en su funcionamiento. En esta forma y a través de contratos bilaterales constituyeron situaciones jurídicas concretas y particulares o derechos en favor de terceros que adquiridos como fueron conforme a las Leyes porque para otorgarlos tenía facultades legales el establecimiento Empresas Municipales de Cali están igualmente garantizados por el artículo 30 de la Constitución Nacional. Como esas cláusulas que garantizan la estabilidad estatutaria en el funcionamiento de Emcali son directamente violadas con un proyecto de acuerdo que modifica los estatutos de la entidad hay que concluir que el proyecto no solo viola los derechos de la persona jurídica Empresas Municipales de Cali propiamente tal si no también los derechos de terceros garantizados como los de aquella por el artículo 30 de la Constitución Nacional.

Además de las glosas de inconstitucionalidad que hemos referido en los apartes anteriores cabe perfectamente objetar el Acuerdo también por motivos de ilegalidad. En efecto es norma elemental de derecho que las Leyes preexistentes a no ser que estas últimas sean reformadas por los medios legales. El tantas veces mencionado artículo 61 del Acuerdo No. 50 de 1.961 dispone un procedimiento especial para dictar Acuerdos que reformen la estructura orgánica de Empresas Municipales de Cali. Comentando este artículo de los Estatutos de Emcali en concepto rendido sobre la facultad del Concejo Municipal de Cali para reformar los estatutos de Emcali por el hoy Senador en representación de Alianza Nacional Popular y extraordinario jurista doctor Guillermo Hernández Rodríguez a principios de 1.969 dice lo siguiente: " Si por vía de examen se depura el artículo (el 61 del acuerdo 50 de 1.961). De los elementos externos semicontractuales a que se ha hecho referencia quedaría reducido el problema desde el simple punto de vista jurídico abstracto a saber si por medio de un Acuerdo puede un Concejo Municipal comprometerse a respetar un procedimiento o reglamentación especial para modificar el mismo Acuerdo .Como quiera que en términos generales un Acuerdo puede ser modificado por otro Acuerdo se trata de analizar si con excepción a esta regla general un trámite establecido por el Concejo obliga irrevocablemente al mismo Concejo ".

"Similar problema se ha presentado a la escala nacional con relación a las leyes. El reglamento de cada una de las Cámaras es una ley y obliga someter los trámites parlamentarios a ese reglamento. Para evadirse de ellos sería preciso modificar la Ley orgánica contentiva del reglamento.

"En el fondo se estableció y el derecho viene evolucionando en este sentido, que ciertas leyes tienen una ponderación especial de mayor valoración unas sobre otras en la escala jurídica.

"Si esto sucede en las leyes con tanta mayor razón debe acontecer en actos de los Concejos de carácter administrativo.

"Evidentemente los Concejos expiden actos diversos que van desde reglamentaciones generales como los Acuerdos sobre tránsito hasta actos singulares y concretos como la aprobación de un contrato. Ciertas de sus decisiones son simplemente una etapa o eslabón de actos administrativos complejos.

"Las Asambleas, según el art. 185 de la carta son Corporaciones Administrativas y en el mismo orden de ideas lo son los Concejos. Por lo tanto estos tienen vocación, como ya se dijo, para producir ciertos actos de carácter general y otros de carácter concreto, particular o individual.

"En todo caso el artículo 61 que se comenta es en el fondo y por su naturaleza una disposición reglamentaria a la cual tendría que someterse el Concejo como las Cámaras a sus Leyes reglamentarias. Para derogar el artículo 61 habría que proceder a expedir un Acuerdo suero a las formalidades de origen y votación previstas en ese mismo texto. Pero una vez aprobado si así sucediere, el Concejo encontraría que le está vedado modificar en los Estatutos las disposiciones esenciales y las que veraan sobre la organización de la Empresa en la medida en que los contratos de empréstitos se hubiera hecho uso de la facultad que el art. 18 otorgó a Emcali de pactar la inmutabilidad de su organización hasta la extinción total de sus deudas...

Se concluye por todo el historial y razones jurídicas presentadas en este concepto que el artículo 61 del Acuerdo No. 50 de 1.961 LIGA Y OBLIGA A SU PROPIO AUTOR, AL CONCEJO MUNICIPAL DE CALI, CON FUERZA DE NORMA REGLAMENTARIA IMPERANTE EN LA MATERIA Y QUE POR LO TANTO TODA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE EMCALI? DEBE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN DICHO TEXTO TENIENDO EN CUENTA ADEMAS LAS LIMITACIONES QUE FLUYEN DEL REGIMEN CONTRACTUAL QUE SE HA ESTRUCTURADO EN LA INSTITUCION DESDE SU NACIMIENTO Y EN SU VIDA".

De nada vale decir en el art. 60. del proyecto de Acuerdo a nuestro estudio que entre otros queda derogado el art. 61 del Acuerdo No. 50 de 1.961 pues para derogar dicho art. habría tenido que someterse el Concejo Municipal al trámite puesto por él mismo para modificar los estatutos de Emcali, es decir, a que la iniciativa fuese tomada por la Junta Directiva de las Empresas aprobada en dos sesiones con intervalos de 8 días y convertida en Acuerdo por el voto mayoritario de las dos terceras partes de los miembros del Concejo. Ninguno de estos requisitos se cumplió en consecuencia el Concejo Municipal está violando una norma dictada por sí mismo con carácter de normativa para el mismo concejo.

Para ahondar en este planteamiento permítaseme que transcriba la parte pertinente del concepto rendido por el Magistrado Eustorgio Sarria al que ya hice referencia; "el art. 61 del Acuerdo 50 estableció un sistema especial para tramitar y adoptar las modificaciones al mismo relacionadas con la constitución y los estatutos del Establecimiento Público y se lo podia hacer el Concejo Municipal de Cali en ejercicio de su competencia de conformidad con el art. 197 de la constitución entendiéndose al obrar así partía de la base de la conveniencia para los intereses del Distrito a su cuidado en otras palabras sometió su capacidad decisoria al cumplimiento previo de requisitos que soberanamente podía definir como una garantía de seriedad y responsabilidad en la organización y manejo de los servicios públicos a cargo de la misma persona jurídica. Vale mencionar además que de igual parecer al de los dos tratadistas y connotados juristas citados atrás doctores Hernández Rodríguez y Sarria se auna el del notable procesalista Hernando Morales cuando dice: "Los estatutos solo pueden variarse con el cumplimiento de los requisitos señalados por el art. 61 o sea por Resolución de la Junta Directiva aprobada en la forma allí prevista que luego debe aprobar el Concejo Municipal mediante acuerdo aprobado por dos terceras partes.

Esto porque si bien el Concejo puede modificar o derogar por Acuerdo, aquello que ha dictado en igual forma, para hacerlo debe sujetarse a las prescripciones que él mismo exigió mientras no las cambie con el cumplimiento de iguales prescripciones.

Además los estatutos de la Corporación provienen no solo del Acuerdo que los estableció si no de su posterior aprobación gubernamental para control de moralidad y legalidad de modo que sus modificaciones no serían aprobadas si no se cumplieran los requisitos que los propios estatutos contemplan para dicho fin".

En mérito a lo arriba expuesto me permito devolver al honorable Concejo objetado por el Ejecutivo el proyecto de Acuerdo "Por el cual se derogan, modifican y adicionan algunos artículos del Acuerdo No. 50 de diciembre 10. de 1.961 y se dictan otras disposiciones". A juicio del Ejecutivo el Acuerdo no puede ser sancionado porque adolece de vicios de constitucionalidad en cuanto viola los artículos 30, 197 y 162 de la Constitución Nacional y de vicios de ilegalidad en cuanto que viola el art. 61 del Acuerdo No. 50 de 1.961.

Del señor Presidente y honorables Concejales muy atentamente,

(fdo) Carlos Holguin Sardi
Alcalde de Cali"

La anterior objeción fué recibida el 3 de diciembre a las 5:30 de la tarde.

Señor
PRESIDENTE Y DEMAS MIEMBROS
Honorable Concejo Municipal
Presentes

Atentamente rindo informe a la Corporación sobre el pliego de objeciones formuladas por la Alcaldía del Municipio al Acuerdo "Por el cual se introducen reformas y modificaciones al Acuerdo No.50 de 1.961."

Este informe lo presento separadamente del que presenten los otros honorables Concejales, comisionados para el caso, no porque entre ellos y yo haya habido puntos de vista encontrados, sino, sencillamente, porque me ha sido difícil reunirme con mis colegas de comisión para estudiar conjuntamente la materia a nosotros encargada.

He estudiado con el detenimiento necesario las críticas hechas por el señor Alcalde al Acuerdo en cuestión y las encuentro carentes de fundamento, por las siguientes razones:

Primera: Considera el señor Jefe de la Administración Municipal que por el hecho de haber creado el Cabildo, por el Acuerdo 50 de 1.961, una entidad que, como Emcali, tiene a su cargo el manejo de varias ramas de la administración local, la Corporación creadora de esa empresa ha quedado definitivamente ajena a ella; que Emcali es una entidad aparte, paralela al Municipio, con una jurisdicción sui generis, que no puede intervenir en ninguna forma el Cabildo y que tiene derechos adquiridos inalienables y absolutos.

Eilo no es así. EMCALI y todas y cada una de las empresas descentralizadas creadas por el Cabildo, no son sino delegatarias de las funciones o atribuciones que jurídicamente tiene el Concejo, y, por lo mismo, éste puede reasumirlas, o modificar los términos de esa delegación cada que lo estime conveniente, pues como es obvio el Concejo es la única entidad que constitucional y legalmente tiene el derecho immanente y perfecto de ejercer la potestad legisladora en lo municipal. Si así no fuera, se formarían entidades enfrentadas que reclamarían el derecho al manejo de la cosa pública, municipal y eso no es lo que ha querido el legislador cuando ha otorgado a las corporaciones del órgano legislativo del poder la facultad de crear esa clase de entidades.

Por este aspecto, el cargo es inaceptable.

Segunda: Invoca el señor Alcalde el artículo 61 del Acuerdo objeto de las reformas, para sostener que por cuanto en dicho artículo 61 se estipularon requisitos que debían tenerse en cuenta para cualquier reforma al mismo Acuerdo 50, ni este Cabildo, ni ninguno otro posteriormente, pueden introducir innovaciones en ese estatuto, sino ciñéndose a la observancia estricta de esos requisitos.

Me permito observar: Lo que ocurre es que si en el referido artículo 61 se establecieron requisitos para hacerle reformas al Acuerdo en cuestión, el Concejo, que no perdió por eso su plena e irrestricta capacidad legisladora en lo municipal, puede atemperarse a ellos, o no. Si se atempera a ellos, quiere decir que el mandato del citado artículo 61, es observado, por una especie de ratificación que hace el Concejo; si no se atempera a esos requisitos, simplemente significa ello que ha revocado, o declarado insubsistente para el caso, en forma tácita o implícita, los mencionados requisitos exigidos en Acuerdo anterior, y ha ejercido, en forma directa, sus atribuciones de legislador municipal. Esto guarda relación con lo que dispone el artículo 2o. de la Ley 153 de 1.387 -que para el caso es procedente- según el cual, por el hecho de haber incompatibilidad u oposición entre una disposición anterior y otra posterior, se estima insubsistente la anterior, pues ello implica, como he dicho, una revocación tácita de la primera disposición.

En mi sentir el Cabildo lo que ha hecho en este caso es reformar, implícita o tácitamente, el referido artículo 61 del Acuerdo No.50 de 1.961.

Tercera: Se trae en forma absolutamente inconducente el artículo 30 de la Constitución, que hace parte del articulado sobre derechos civiles y garantías sociales, para afirmar que se está violando una propiedad privada o derechos adquiridos de Emcali. Propiedad privada y derechos adquiridos de Emcali contra el Municipio.

Habría sido suficiente que se hubiese leído por el ilustre señor Alcalde el título de la reglamentación constitucional a que pertenece el artículo 30, invocado, para que se hubiera caído en la cuenta que todo ese articulado del título en cuestión hace relación a derechos civiles y garantías sociales de particulares- sean personas jurídicas o naturales- y no a la función administradora inspirada en los principios del derecho constitucional, que incumbe a los organismos o entidades que integran la rama de la administración pública. Esa objeción, señor Presidente y Honorables Concejales, no resiste el análisis.

Cuarta: Tampoco encuentro valedera la tacha que se hace, por el señor Alcalde, a la forma como dispone el Acuerdo sometido a su estudio, la designación de los representantes del Concejo en Emcali. Afirma tan distinguido y prestante funcionario que se viola la representación proporcional de los partidos, que garantiza el artículo 172 de la Constitución, para cuando se vote en elecciones populares o en una Corporación por dos o más individuos; ya que de antemano se prescribe que el Presidente del Cabildo representa también a éste, a más de los otros tres que designa la Corporación por cuociente, en la Junta Directiva de Emcali, y esto, según las modificaciones adoptadas por este Cabildo.

Me permito argüir lo siguiente:

Aparentemente ello sería así, si el Presidente del Cabildo a todo lo largo del período a que se extiende la legislatura municipal, fuera la misma persona y de la misma filiación política. Pero conforme, al artículo 94 del Reglamento del Concejo de Cali, los Presidentes son elegidos cada seis meses; y, por otra parte, conforme al parágrafo del artículo 83 de la Constitución, las minorías tienen derecho a participar en las mesas directivas de las Corporaciones. Y no se puede juzgar, a priori, que a lo largo de las sesiones del Concejo se vaya a excluir sistemáticamente a cualquiera de los grupos que pudiéramos llamar "minoritarios" de gozar de esa facultad o derecho que le asigna la Carta Constitucional. En esta forma, pues, se cumple con el fenómeno de la representación proporcional de los partidos, y queda sin valor legal la objeción formulada por el señor Alcalde sobre este punto.

Quinta: Expone el señor Alcalde que, conforme al artículo 197 de la Constitución, que otorga al Jefe de la Administración la iniciativa para proponer ante el Concejo la creación de Establecimientos públicos, sólo ese despacho puede proponer no solamente la creación de ellas, sino a cualquier reforma a sus estatutos. Y que, por lo mismo, las reformas contempladas en el Acuerdo que se ha sometido a su estudio, para sanción, pecan de inconstitucionales. Me permito observar:

Por una parte, si ello fuera estrictamente así, ya habría una contradicción en este punto del enfoque de las objeciones que hace el señor Alcalde, porque el mismo funcionario ha sostenido que conforme al artículo 61 del Acuerdo 50, reformado, las modificaciones deben ser pedidas al Cabildo por la Junta Directiva de Emcali. Y luego sostiene que es el Alcalde, de acuerdo con la Constitución, quien debe sugerirlas. Pero lo cierto, señor Presidente y Honorables Concejales, es que si bien la iniciativa de proponer la creación de Establecimientos Públicos la tiene el Alcalde, ello no implica que las reformas al funcionamiento de esas empresas- y máxime a las que ya funcionaban antes de la Constitución vigente- no pueda decretarlas la entidad -Concejo- que fué la creadora del organismo descentralizado. La norma constitucional habla de crear, y de acuerdo con una sana hermenéutica, en las leyes y normativas jurídicas, las palabras deben entenderse en tenor literal cuando es claro, y no debe desatenderse a pretexto de consultar su espíritu (artículo 27 del C.Civil) De acuerdo con lo anterior, si la Constitución establece que los Cabildos deben crear empresas a iniciativa del Alcalde, ello no significa que no puedan reformarlas o implantarlas modificaciones en su funcionamiento, pues crear y modificar son términos distintos. Además, bien claramente dispone el ordinal 3o.) del artículo 197 de la Constitución que los Cabildos tienen, entre sus funciones, la de "deter-

3.
minar la estructura de la administración municipal; las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo... De modo que en la expresión: "determinar la estructura de la administración", estaría perfectamente comprendida cualquier actividad legislativa del Cabildo, tendiente a modificar el funcionamiento de una empresa. La objeción por este aspecto carece de base legal.

Sexta: Se aduce, en el pliego de objeciones, que se han violado derechos adquiridos de terceros, porque Emcali, con base en los artículos 18 y 38 del Acuerdo No. 50 de 1.961, se ha obligado en contratos celebrados para la ejecución de obras de beneficio público, a mantener incólumes sus estatutos y el funcionamiento de la Empresa. Este argumento cae en el vacío porque precisamente el Acuerdo que ha objetado el señor Alcalde, contempla sabiamente ese caso, y en uno de sus artículos finales expresamente reitera o ratifica el principio de la continuidad de Emcali, como empresa descentralizada y apta para adquirir derechos y contraer obligaciones, y establece además, que sustancialmente no se reforma su carácter, ni su naturaleza, ni se lesiona su patrimonio, ni se restringen sus facultades, y mantiene vigentes su capacidad y solvencia como deudora de los organismos internacionales implicados en las negociaciones.

No hay pues, señor Presidente y honorables Concejales, desconocimiento de derechos adquiridos de terceros, y sea esta la ocasión para recordar que no pocas veces se confunden los derechos adquiridos con las simples expectativas de dominio, que es cosa muy distinta.

Septima: Por último, observa este modesto informador que a lo largo de la carta de objeciones se han insertado conceptos de tratadistas de derecho administrativo inconsultados para el caso.

Me permito anotar: Los únicos pronunciamientos que tienen fuerza obligatoria en lo tocante a precisar los alcances de la Constitución, leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos, son los que hacen las mismas Corporaciones o entidades que los expiden. Y lo hacen con carácter de autoridad (art. 25 del C. Civil) Los jueces y tribunales lo hacen por vía de doctrina (art. 26 ibidem). Los conceptos de los particulares, por eminentes que sean, son discutibles, y de valor relativo. Tienen mayor o menor fuerza de convicción, según las circunstancias en que se emitan.

Cuando se invoca el concepto sobre temas legales, de un tratadista, extraído de una obra escrita, en que se trata la materia, ese concepto está revestido de la autoridad que le da el criterio maduro y sólido con que se ha preparado y elaborado la materia. No es lo mismo cuando el concepto se da aisladamente, por encargo y en razón de prestar un servicio profesional. En estos casos se ha comparado, y no sin razón, a muchos profesionales con los sastres: pues se ha entendido que así como los últimos cosen los trajes teniendo en cuenta las medidas anatómicas del cliente y el valor pagado, aquellos, a veces, emiten sus conceptos también, teniendo en cuenta las exigencias del cliente que solicita sus servicios y se los paga.

No sobra decir, señor Presidente y Honorables Concejales, que al presentar mi informe, no me ha movido ninguna consideración distinta del firme deseo de servir al Municipio de Cali, a través de la Ley y de lo que considero más conveniente, útil y necesario.

Siento un profundo respeto y admiración por las personas de los funcionarios públicos de la ciudad y debo presumir su gran preparación y su ardiente deseo de servicio.

Pero otra cosa es considerar que los fueros del Concejo deben respetarse igualmente, y que esta H. Corporación no puede renunciar a su derecho y obligación de legislar.

Y por las consideraciones antes dichas, respetuosamente me permito proponer: Declaranse infundadas las objeciones hechas por el señor Alcalde Municipal de Cali al Acuerdo "Por el cual se introducen modificaciones al Acuerdo No. 50 de 1.961,

al Acuerdo "Por el cual se introducen modificaciones al Acuerdo No.50 de 1.961, y devuélvasele el Acuerdo objetado para que se sirva sancionarlo.

Honorables Concejales, vuestra comisión,

(fdo.) JORGE FIDEL FORY

Calif, Diciembre 7 de 1.970

CALI, Diciembre 9 de 1.970

Recibido en la fecha, va al Despacho del señor Alcalde el anterior ACUERDO

No.

003

LUIS BARRUE TOVAR DIAZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO I. DE LA ALCALDIA



ALCALDIA MUNICIPAL.

CALI, Diciembre 11 de 1.970

PUBLIQUESE Y EJECUTESE . En consideración a que las objeciones propuestas por el Ejecutivo Municipal, han sido declaradas infundadas por el Honorable Concejo Municipal, se procede a impartir la sanción correspondiente en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 176, del Código de Régimen Político y Municipal.

MUNICIPIO DE CALI
SECRETARIA DE GOBIERNO

CARLOS HOLGUIN SARDI
ALCALDE DE CALI

ALFREDO REY CORDOBA.
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.

RODRIGO VALENCIA CAICEDO.
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL.

MARIA MERCEDES GOMEZ DE OREJUELA
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA

ARCESTO JORDAN MORA.
SECRETARIO DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL.

MARIO TOBON LONDONO
SECRETARIO DE OO. PP. MUNICIPALES.

GERMAN VILLEGAS VILLEGAS.
SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDIA.

CALI, Diciembre 11 de 1.970

En la fecha, fué publicado por bando el anterior ACUERDO

No. 023

ALFREDO REY CORDOBA.
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.

SECRETARIO